

Un suicidio anunciado

El Sr. Rajoy no es un político. En realidad no se diferencia gran cosa del muñeco Rockefeller que José Luis Moreno exhibe en sus espectáculos. Sí, el Sr. Rajoy es una simple marioneta de los poderes fácticos que constituyen los integrantes del mundo financiero internacional.

Unos poderes que, guiados por su ambición y avaricia, imponen políticas que tienen por único fin mantener sus cuotas de beneficio. Solo así se explica que se adopten medidas como las anunciadas en el parlamento. Unas medidas que en ningún caso van a servir para resolver la actual crisis, porque lo único que van a lograr es deprimir aun más nuestra maltrecha economía.

Basta una limitada lucidez mental para darse cuenta que con más de cinco millones de parados, lo último que necesitamos es alargar la jornada y la vida laboral. Habrá que recordarles que dos más dos suman cuatro, y si cada trabajador en activo trabaja más horas y más años, el número de puestos de trabajo necesarios para una determinada producción se reduce. Luego, como consecuencia, más paro.

Si reducimos los ingresos de la clase trabajadora, se reduce la demanda, y por efecto en cadena, la de pequeños y medianos empresarios (los principales clientes de estos son los trabajadores). Luego más caída de la demanda y de la actividad económica.

La reducción y privatización de servicios públicos lleva, en realidad, a su desaparición, puesto que la mayor parte de la sociedad no estará en disposición de acceder a ellos. Su pérdida de poder adquisitivo les condena a tal pérdida. Ello es especialmente grave cuando hablamos de salud y cultura.

Hay quien argumenta que tales pérdidas conllevarán una mayor capacidad productiva futura. La base del argumento es que una mano de obra dócil y barata permitiría competir ventajosamente en el campo económico internacional. Por supuesto no se plantea tan crudamente porque demostraría la nula calidad humana de quien eso defiende, ya que está dispuesto a condenar a millones de personas a una vida denigrante con tal de mejorar la tasa de beneficios empresarial.

Pero es que ni siquiera esto es cierto. Cuando la Sra. Merkel insiste en sus suicidas recetas liberales, se olvida que ella es la heredera de quienes impusieron a España la destrucción de buena parte de los sectores primario y secundario de la economía, como condición para el ingreso en la Europa Unida. Y si tenemos que competir, en un mercado libre, con la producción industrial del lejano oriente, además de tener que crear esa industria, deberemos hacerlo en las condiciones de semi-esclavitud que allí imperan. Además, ¿Desea realmente la Sra. Merkel que nosotros nos constituyamos en su competencia industrial poniendo en peligro la capacidad productiva alemana? Sinceramente, no me lo creo. ¿Y si todos los países nos dedicamos a reducir condiciones laborales para ser más competitivos? ¿Quién comprará la producción, por barata que esta sea?

Cual modernos Maquiavelos, los políticos y sus voceros (léase medios de comunicación y periodistas serviles y corruptos) han utilizado a los funcionarios como cabeza de turco y punto más débil para sus ataques contra la ciudadanía. Se ha afirmado hasta la saciedad que su número es excesivo, que su actividad es poco productiva y que sus retribuciones son excesivas. Y lo peor es que buena parte de la gente se lo ha creído, sin hacer el más mínimo esfuerzo en comprobarlo.

Si son tantos ¿Por qué el funcionariado en España representa solo el 9% de la población activa y en Suecia el 25%? Que estos recursos estén mal utilizados es otra cosa, pero en todo caso eso es responsabilidad de los políticos de turno, y consecuencia de su total y absoluta incapacidad de gestión. Y si se dan casos de excesiva tolerancia en la aplicación de las normas de funcionamiento, ello es debido a, precisamente, la búsqueda del clientelismo dentro de la administración por parte de buena parte de las organizaciones políticas. Ya sabemos que, para nuestra desgracia, nuestros políticos son proclives a fomentar la corrupción.

En cuanto a sus supuestas retribuciones excesivamente elevadas, estamos ante otro bulo. ¿Quiero decir que no hay personas en la administración que tienen salarios excesivamente elevados? No, haberlas las hay, pero no el funcionario medio. Su retribución base es en realidad baja. Pero existe una minoría (aquellos más se han vinculado a las organizaciones políticas) que, vía complementos, cobran cantidades realmente elevadas. A ellos hay que unir los salarios y gastos de los propios políticos y, algo que sí clama al cielo, la de los "asesores" (nombrados a dedo, con salarios millonarios, y en muchos casos la decisión de nombramiento está basada en razones

familiares, de amistad, o favores debidos). Si realmente se quieren reducir los costes de la administración, dos son las primeras medidas a tomar: prohibición de asesores (El partido que opta a ocupar puestos de responsabilidad en la administración debe contar con políticos capaces para gestionar lo público. Es su problema, y si necesita un asesor, que lo pague el propio partido, no el ciudadano. Si no se ve con capacidad para tal gestión, que no se presenten a las elecciones). La segunda, las retribuciones de todos los políticos deberían estar referidas al salario base interprofesional, ser un múltiplo del mismo. Si los políticos consideran que su salario debe ser revisado, será porque también debe serlo el de todos los trabajadores. Es indecente que ellos mismos decidan su propio salario sin ningún tipo de cortapisa.

La subida del IVA es una evidente demostración de la injusticia social que preside las políticas neoliberales. Consideremos una comparación básica que, aunque discutible, evidencia lo injusto del impuesto.

Si tomamos para la comparación un mileurista, cuyos mil euros mensuales deberán ser dedicados íntegramente al consumo, ello representa que abonará 210 euros en impuestos al consumo, y por tanto soportará una presión fiscal indirecta del 21% (a parte del IRPF).

Por el contrario el perceptor de rentas (sean o no de trabajo) de, por ejemplo, seis mil euros/mes, y con un consumo tres veces superior (3000 euros) abonará por el mismo concepto de impuestos al consumo 630 euros, lo que se traduce en una presión fiscal del 10,5%. Es decir, teniendo acceso al triple de consumo soporta la mitad de la presión fiscal. Y como le queda margen para el ahorro, puede realizar operaciones que reduzcan la presión fiscal sobre el IRPF. La discriminación fiscal entre ciudadanos, en función de la cuantía de sus rentas, es más que evidente.

Pero más allá de la inmoralidad que supone esta acción, los efectos prácticos sobre la economía son perversos. Si el consumo, salarios y tasa de beneficios se mantuvieran inalterados, la subida del IVA llevaría implícito un incremento de la inflación equivalente, además de su evolución normal y esperable. Si ello no sucede, será un indicador claro de caída de actividad económica. Y eso es precisamente lo previsible en estos momentos. Justo lo inverso de lo que necesitamos. Por el contrario se sigue sin presionar fiscalmente

las rentas altas y sin perseguir el fraude fiscal generado por dichas rentas.

Medidas como la reducción de coberturas en situaciones de paro, o en incapacidad temporal, además de ser actos calificables de criminales, son una clara demostración de cómo, sistemáticamente, la clase trabajadora es criminalizada.

Que puedan existir casos de fraude, no lo pongo en duda, pero lo inadmisibles es que se condene a todos los trabajadores por la actuación de una minoría. Además hay varias cuestiones a tener en cuenta. Sin pretender ser una justificación, lo cierto es que con el actual proceso de degradación social que padecemos, las clases trabajadoras se ven abocados a una economía de supervivencia. Por tanto harán todo cuanto crean conveniente para garantizar, en la medida de lo posible, dicha supervivencia, sea ello legal o no. Y tal actitud no es criticable por aquellos que, precisamente, son los responsables últimos de que se den las actuales circunstancias. Después de todo, la actual crisis tiene unos claros responsables: financieros sin escrúpulos que han especulado para conseguir el máximo beneficio, tecnócratas que han justificado este modelo económico, y políticos que lo han consentido. Ahora estos, los auténticos criminales, rizan el rizo criminalizando a quienes intentan simplemente sobrevivir. Se critica a trabajadores que prefieren cobrar el paro a aceptar un trabajo con un salario de mierda, que es incluso bastante menor que el subsidio, pero se tolera que financieros, tecnócratas y políticos sigan cobrando retribuciones millonarias, a pesar de sus evidentes responsabilidades en la situación en que vivimos. Y se permite que sigan especulando agravando aun más la situación. Es pura y criminal hipocresía.

Pero quizás la evidencia de la hipocresía, perversión y falta de humanidad, donde queda claramente reflejada es en la exclamación de la diputada del PP, cuando creía no ser escuchada: ¡Que se jodan!

Incluso si sus disculpas contienen el más mínimo atisbo de verdad (que la expresión estaba dirigida a las bancadas socialistas), debe ser analizado en el contexto. Surge a raíz del anuncio de las medidas económicas, luego es una clara descalificación de quienes protestan por sus efectos nocivos sobre la ciudadanía, y con ello de los propios afectados. La diputada Andrea Fabra ha demostrado una total insensibilidad y el desprecio más absoluto, no solo a los cinco millones largos de parados, sino al conjunto de la ciudadanía, ya que

todos somos afectados (unos más y otros menos) por unas medidas tan perversas como ineficaces.

Pero lo que demuestra el carácter deshonesto de los actuales mandatarios políticos, y que no estamos ante un caso excepcional (el de la diputada del PP) es que el gobierno ha limitado la publicación íntegra de sus medidas a una Web en inglés, dirigida a los inversores, escondiendo una parte de las mismas, tanto al congreso como a la ciudadanía, demostrando una vez más que quienes han sido elegidos por las urnas desprecian el sistema democrático y solo obedecen a los especuladores ¿Qué calificativo merecen quienes así actúan?

Para nuestra desgracia los actuales políticos que deciden sobre nuestro futuro, los tecnócratas incapaces sobre los que se apoyan y un sector financiero que basa su actividad en la pura especulación improductiva, disponen, hoy por hoy, de todo el poder. Sus decisiones, tomadas bajo las directrices de un moral y mentalidad de salteadores de caminos, nos llevan, paso a paso, al desmoronamiento total de nuestra sociedad. Adormecidos por el pensamiento liberal e individualista que sopla desde los años ochenta, nuestra sociedad es, mayoritariamente, incapaz de reaccionar. Cuando la situación llegue a límites más extremos, la única alternativa posible será violenta. Es una lástima que el infantilismo que ha condicionado la actuación humana a lo largo de la historia, nos haya incapacitado para desarrollar un modelo social lo suficientemente justo para que sea estable. Puede que estemos condenados como especie, que seamos un proyecto fallido. Si es así, nuestro futuro pinta muy negro.